

Políticas sociales en Chile. Agenda y diseño del gobierno central y la implementación a nivel local

Bernardo Navarrete

Universidad de Santiago de Chile

bernardo.navarrete@usach.cl

Resumen

Los alcaldes en Chile no pueden enumerar con precisión las políticas, planes y programas sociales en sus territorios debido a la variabilidad en la cantidad, calidad y conteo de los datos. Este artículo se organiza en torno a dos preguntas clave: ¿cuántas políticas, planes y programas se implementan en los municipios chilenos? y ¿qué proyectos implementan los municipios a partir del análisis del Banco Integrado de Proyectos de Inversión Social? Estas preguntas se abordan mediante Análisis Exploratorio Descriptivo y Análisis Bivariado, utilizando la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Los resultados indican que los municipios con mayor población tienen más iniciativas de inversión. Los sectores con más proyectos son vialidad peatonal, desarrollo urbano, educación, deporte y salud. Las comunas pobres tienden a postular iniciativas de menor costo debido a su limitada capacidad de gestión.

Nota biográfica

Bernardo Navarrete es Doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, España. Sus áreas de especialización son las políticas públicas, la migración, los gobiernos subnacionales y el sistema de partidos. Es docente de la Universidad de Santiago de Chile en el Departamento de Estudios Políticos y posee la cátedra UNESCO sobre Transparencia y Acceso a la Información alojada en la Universidad de Santiago de Chile 2024.

Palabras clave: Políticas sociales, agenda, inversión, municipios, Chile.

I. Introducción

Chile constituye un escenario singular en el contexto de la descentralización, caracterizado por su geografía alargada y dividida en 16 regiones, 56 provincias y 345 comunas. Desde los años setenta, el país ha oscilado entre una estructura centralizada, propia de sistemas presidencialistas, y un impulso hacia la regionalización, con un punto culminante en la elección directa de los Gobernadores Regionales en 2021 (Montecinos, 2005; Mardones, 2006; Henríquez Opazo, 2020; Mancilla Abusto, 2023). Este entorno multinivel es crucial para comprender la implementación de políticas sociales en Chile. Según Navarrete y Figueroa (2011), el modelo predominante es el Top-Down, donde las políticas fluyen desde el nivel ejecutivo hacia abajo (Boeninger, 2007; Aninat et al., 2011), lo que implica que las municipalidades, aunque clave en la ejecución, no necesariamente manejan de manera independiente el ciclo completo de las políticas sociales.

La literatura actual no ofrece una descripción de la agenda de políticas sociales a nivel local, lo que se complica aún más por la ausencia de una agencia estatal de evaluación de políticas públicas (Olavarria y Huencho, 2010; Olavarria, 2012). La falta de un marco estandarizado para políticas sociales a nivel comunal limita el análisis a estudios de caso. Por consiguiente, es difícil para los alcaldes detallar completamente qué políticas, inversiones, planes y programas sociales se están implementando en sus jurisdicciones.

Ante este escenario, esta investigación aborda dos interrogantes principales: ¿Cuántas políticas, planes y programas se implementan en los municipios chilenos y qué proyectos están llevando a cabo? Dada la magnitud de semejantes preguntas, este estudio adopta una aproximación exploratoria y preliminar para entender mejor la oferta social, explorando en profundidad la metodología en secciones posteriores.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. Inicia con la revisión de la literatura centrada en qué son las políticas sociales, para poder establecer una conceptualización mínima. Sigue con la descripción del modelo local chileno, para pasar a la definición del sistema de protección social en Chile y sus particularidades. Finalmente, muestra el estado del arte de los estudios sobre políticas sociales locales en Chile. La siguiente sección se concentra en la especificación metodológica, para luego pasar al análisis de datos y los resultados obtenidos. Se cierra con una conclusión de los principales hallazgos, las limitaciones del estudio y las potenciales investigaciones futuras.

II. Marco Teórico

II.a. Sobre las políticas sociales

La política social es una actividad centrada en la intervención del Estado para mejorar la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población. Así, se entiende como un conjunto de acciones y programas implementados por el Estado y otras instituciones para abordar y mitigar las desigualdades socioeconómicas y mejorar el bienestar (Woolf, 2009; Huber y Stephens, 2012). Este concepto abarca elementos relacionados con las políticas públicas, la redistribución, las desigualdades y el bienestar ciudadano, entre otros aspectos.

Autores como Dollery y Wallis (1997) sostienen que las políticas sociales son acciones que los Estados emprenden con el objetivo, en la mayoría de los casos, de redistribuir recursos allí donde existen fallas de mercado. En tanto, la política social no solo busca atender las

necesidades básicas, sino también garantizar el acceso a oportunidades y recursos de manera equitativa.

En cuanto a la evolución histórica del término, Alcock (2022) sostiene que la política social, tal como la entendemos actualmente, surge a principios del siglo XX con los ministros británicos Asquith y Lloyd George, entre 1900 y 1920. Durante este período, se aprobaron importantes carteras presupuestarias para proyectos sociales, lo que constituyó un antecedente significativo para el posterior sistema de Estado de Bienestar en los años 30 y la política keynesiana centrada en combatir la Gran Depresión de 1929. Con el tiempo, y especialmente a partir de los años 70 con el debilitamiento del Estado de Bienestar, la política social comenzó a consolidarse como una herramienta estatal orientada principalmente a combatir la pobreza. Este enfoque la transformó en un tipo de política específica, en lugar de un principio abarcador del plan de gobierno, implementada por gobiernos de diversas ideologías en todo el mundo y con un claro espíritu de articular a diversos actores en los proyectos sociales (Alcock, 2022).

En vista de lo anterior, se puede observar que la idea de política social se transforma en un proceso de múltiples actores que han cobrado relevancia desde el proceso globalizador y las nuevas formas de gobernanza democrática (Daly, 2003; Deacon, 2007; Morgan y Campbell, 2011). En este contexto, se busca integrar la participación ciudadana (Torri, 2012; Falleti y Cunial, 2018), las organizaciones no gubernamentales (Pinnock, 2002; Cook y Vinogradova, 2006) y las empresas (Rein y Rainwater, 2019).

La gobernanza de la política social se puede analizar a través de diversas perspectivas teóricas. Desde una óptica estructuralista, estas políticas se consideran mecanismos para reproducir o transformar las estructuras sociales existentes, ubicando a los actores en una encrucijada entre la dependencia a las estructuras establecidas y las intenciones transformadoras (Caporaso y Jupille, 1999). Por otro lado, los enfoques institucionalistas ponen énfasis en cómo las características y capacidades de los gobiernos locales influyen en la formulación e implementación de dichas políticas y en el juego de actores (Béland, 2005). Además, los enfoques basados en la teoría de la elección racional y la agencia consideran cómo los actores locales, incluidos los políticos y los ciudadanos, interactúan y toman decisiones en función de sus intereses y restricciones (Hoggett, 2011; Greener, 2002).

Por tanto, el concepto de política social se encuentra en constante evolución y debate, dado que su definición y alcance varían según el contexto histórico, cultural y político en el que se inscriba.

Respecto a las políticas sociales municipales, Torjman y Leviten-Reid (2003) sostienen que los gobiernos locales son actores clave debido a su proximidad a la comunidad. Argumentan que, en tiempos de crisis económica, los gobiernos locales tienen un conocimiento más detallado de la población, permitiéndoles identificar a los desempleados y a las personas en situación de alta vulnerabilidad, lo que les otorga una mayor capacidad de sondeo y actuación. Por otro lado, Saha (2009) afirma que el proceso de desarrollo sostenible, centrado en la equidad y la planificación urbana, debe estar estrechamente vinculado a las actividades de los gobiernos locales. Estos actores contemporáneos deben responder de manera efectiva al aumento significativo de la diversidad en las ciudades, una tarea que recae sobre ellos debido a la creciente incapacidad de los gobiernos centrales para abarcar la totalidad del territorio, lo que hace necesaria una gobernanza conjunta.

En el caso de Chile, las políticas sociales municipales adquieren particular relevancia debido a su rol en la descentralización y al papel determinante que juegan las autoridades locales en la gestión y representación política (Dini y Correa Mautz, 2019; Fløysand, Barton y Román, 2010). Sin embargo, el modelo chileno se caracteriza por un enfoque de política social de tipo top-down (Navarrete y Figueroa, 2011). En este esquema, los gobiernos municipales son responsables de la ejecución directa de algunas políticas, mientras que el gobierno central se encarga del financiamiento y, frecuentemente, de la planificación estratégica de dichas políticas a través de programas nacionales. Este modelo será analizado con mayor detalle más adelante para entender las complejidades del caso chileno.

En suma, las políticas sociales se pueden definir como un conjunto de acciones y programas implementados por el Estado y otras instituciones para mejorar el bienestar de la población y/o mitigar las desigualdades socioeconómicas. Y para el caso chileno, las políticas sociales locales son cruciales para comprender la gestión de las necesidades ciudadanas y su respuesta institucional.

II.b. El modelo local chileno

Para abordar la oferta social en el ámbito de las municipalidades, es crucial entender cómo en Chile existe un modelo muy particular de estructura multinivel.

En Chile, los gobiernos locales están conformados por las municipalidades, dirigidas por un alcalde y un consejo municipal, ambos elegidos por la población en elecciones separadas cada cuatro años. Actualmente, existen 345 municipios, cuyo diseño institucional se originó durante el régimen autoritario del general Pinochet (1973-1989). Este período significó una transformación completa de la institucionalidad comunal, dotándola de recursos, funciones, atribuciones, capacidad técnica y poder para administrar los servicios locales (Navarrete, 2023).

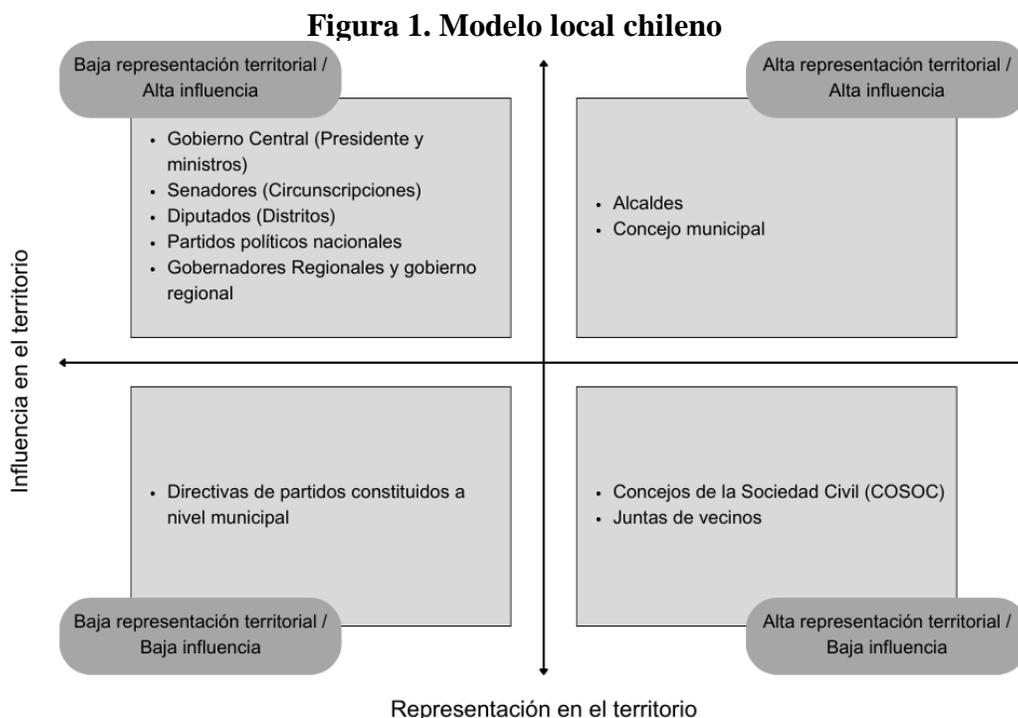
Con el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos locales se consolidaron como la principal "ventanilla" de acceso a los diversos servicios públicos, convirtiéndose en el medio más directo de relación entre los ciudadanos y el Estado. En el contexto latinoamericano, el municipio chileno tiende a clasificarse dentro del modelo anglosajón, cuyo objetivo es la provisión eficiente de servicios básicos, como educación (primaria y secundaria) y salud (Nickson, 1998), entre otros. En este modelo, el alcalde posee dos facultades centrales: políticas y administrativas, siendo clasificado como un modelo de "alcalde fuerte" (strong-mayor) (Mouritzen y Svara, 2002)

Así, las municipalidades actúan como ejecutoras de las políticas sociales siguiendo las directrices y financiamiento del gobierno central, especialmente en lo que respecta al presupuesto. Esto es coherente con el nivel regional, ya que, en gran medida, las políticas locales quedaron bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales, los cuales eran designados por el nivel central.

Los inicios del modelo chileno se pueden rastrear en 1974, cuando se implementó un proceso de regionalización (Montecinos, 2021; Montecinos, 2020; Navarrete e Higuera, 2014; Montecinos, 2005b; Mardones, 2006; Waissbluth, Leyton e Inostroza, 2007) con un enfoque neoliberal centralista, caracterizado por una estrategia de control atomizado y la implementación de políticas top-down. Ese mismo año, se creó la figura del Intendente Regional, un cargo designado por confianza presidencial, para consolidar el control central

y en 1980, se estableció la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), encargada de transferir la gestión de la educación y la salud a los municipios, aunque manteniendo la centralización de los proyectos y la planificación estratégica.

Esta particularidad de dicho modelo, a saber, un Estado unitario centralista con una perspectiva top-down de las políticas sociales, sumado a elementos de descentralización regional y con una figura local, el alcalde, con una fuerte influencia en el territorio, genera un esquema complejo en la jerarquía de influencias (ver figura 1) en las políticas sociales al nivel territorial más específico.



Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica

La implementación de políticas sociales se enmarca, entonces, en un circuito que parte desde el nivel central con el financiamiento, y termina en la ejecución directa a través de las municipalidades.

En este contexto de políticas top-down y gobiernos locales con niveles de autonomía administrativa pero limitada autonomía presupuestaria, un aspecto crucial del caso chileno es la dificultad para identificar con precisión qué tipos de políticas locales se implementan en las municipalidades y con qué frecuencia. Esta situación puede ser una consecuencia natural del modelo chileno, donde la alta discrecionalidad de los alcaldes en su rol de administradores y representantes políticos, combinada con la planificación centralizada de las políticas, ha llevado a la inexistencia de sistemas integrados que permitan observar las políticas implementadas a nivel local en forma particular. Esto impide una descripción basada en evidencia de las políticas locales en Chile, más allá de estudios de casos particulares.

El reconocimiento de qué tipo de políticas se implementan en el territorio es fundamental para identificar no solo las necesidades de la población, sino, la agenda local de los municipios que se configura entre el nivel central, regional y local. A este respecto, la siguiente sección profundiza la literatura sobre las políticas sociales a nivel local en Chile y deja en evidencia esta debilidad que tenemos sobre el territorio comunal.

II. c. El estudio de las políticas sociales locales en Chile

Los estudios sobre la política social en Chile se han enfocado en estudios de caso, sobre aquellas dimensiones que más impacto tienen en la pobreza y la desigualdad de la población, como la salud (Lazarus *et al.*, 2022), la educación (Valenzuela, Labarrera y Rodríguez, 2008; Olate, 2018) y la planificación urbana (Sabatini y Brain, 2008; Rodríguez y Sugranyes, 2004). Una revisión de la literatura reafirma esta idea, observando que el estudio de las políticas sociales en Chile está centrado en los estudios de caso y las políticas a nivel central, lo que denota un vacío en los estudios que buscan caracterizar las políticas sociales locales a nivel general y longitudinal.

Pero, si bien los estudios sobre política social se enfocan en sectores de impacto y, aunque no siempre se centran en los gobiernos locales, es imposible no mencionar la relevancia de las municipalidades y el nivel territorial comunal. En la mayoría de estos estudios, ambos espacios juegan un papel fundamental en la descripción de los casos.

Algunos estudios se han centrado en el caso de la salud. Enfocando análisis sobre la necesidad de nuevas propuestas de salud pública en contextos de crisis (Lazarus *et al.*, 2022). Por otro lado, otras corrientes de investigación han puesto foco en la dimensión medioambiental. Autores como Aldunce *et al* (2017) se centran en el estudio de las políticas locales sobre sequía. Mientras que, por su parte, Llanquileo-Melgarejo y Molinos-Senante (2021) estudian las políticas locales enfocadas a la ecoeficiencia de los sistemas de gestión de residuos sólidos orgánicos.

Otros autores se han centrado en el componente participativo de las políticas. Al respecto, Muñoz Arce y Pantazis (2019) estudian las formas de participación ciudadana en el sistema sanitario a nivel local, por su parte Delamaza *et al.* (2012) analizan las oportunidades para fortalecer la ciudadanía en Chile, dentro de un contexto donde los arreglos institucionales actuales limitan los espacios de participación social. León Aravena y Figueroa Silva (2020) exploran cómo los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) abordan las necesidades de gobernanza y deliberación democrática, integrando elementos de capital social y cultural. Winchester (2005) estudia la administración social municipal de iniciativas para la erradicación de la pobreza en Chile, a partir del Programa Puente y Chile Solidario.

Así mismo, la educación ha sido un espacio de investigación. Valenzuela, Labarrera y Rodríguez (2008) estudian el proceso de transición a la democracia desde la perspectiva de la política social educativa, en particular la educación pública donde los municipios juegan un papel fundamental durante los años 90s. Olate (2018), por su parte, realiza un análisis crítico de las políticas educativas actuales en Chile, enfocándose en el proceso de escolarización de migrantes. Examinando detalladamente cómo diversos instrumentos curriculares abordan y responden a las necesidades de una parte de esta población con altos niveles de vulnerabilidad.

Otra dimensión son los estudios urbanos, asociando la planificación urbana como componente central del desarrollo de las localidades y disminuir la segregación (Sabatini y Brain, 2008). Rodríguez y Sugranyes (2004) estudian los “nuevos problemas urbanos” luego de las políticas habitacionales, tales como la segregación, fragmentación, inseguridad y hacinamiento.

En síntesis, no se han identificado artículos que caractericen las políticas sociales a nivel longitudinal, sino que más bien el desarrollo de estudios está centrado en enfoques y/o casos específicos. Esto es comprensible, ya que, como se mencionó previamente, la ausencia de un sistema de evaluación de políticas públicas y de un sistema integrado de oferta social por nivel de gobierno dificulta significativamente la caracterización de “lo que hacen los gobiernos locales”.

II. d. El sistema de protección social en Chile

A partir de los años 90, la política social en Chile se reestructuró significativamente para centrarse en la inversión social focalizada en las políticas asistenciales. El objetivo era distribuir más equitativamente los beneficios del crecimiento económico entre una mayor parte de la población y extender el alcance de las políticas y programas sociales a grupos que anteriormente no habían sido considerados (Boeninger, 1997; Ffrench-Davis, 2003).

En este contexto, Covarrubias, Irarrázaval y Morandé (2011) sostiene que, en Chile, la estrategia de protección social se fundamenta en la convicción de que las políticas sociales deben enfocarse en erradicar la pobreza y eliminar las desigualdades, elementos que generan riesgos sociales que impactan tanto a las familias como a los individuos, focalizando los esfuerzos en mejorar primero las condiciones materiales de los mismos.

El ente que tiene mayor relevancia para las políticas sociales es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), el que se divide en las Subsecretaría de Evaluación Social, de Servicios Sociales y de Niñez. Este ministerio define su misión como “contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social” (MDSF, 2024).

El sistema de protección social en Chile se define en políticas para enfrentar la pobreza, políticas sectoriales y seguridad social (ver figura 2). La protección social en Chile a 2024, está definida por cinco grandes áreas. “Chile Crece Contigo”, enfocado en la protección integral de la niñez. “Chile Cuida” enfocado en apoyo y cuidados a personas con dependencia. “Chile Seguridades y Oportunidades” enfocado en familias en extrema pobreza. “Elige Vivir Sano” enfocado en la vida saludable para la población. Y finalmente, “Red de Protección Social” que permite la integración centralizada de información sobre beneficios para la población general, todo con el objetivo de entregar los servicios de forma expedita.

Figura 2. Sistema de Protección Social en Chile



Fuente: Elaboración propia con datos Subsecretaría de Previsión Social (2022)

Actualmente, la oferta de programas sociales a nivel nacional son 104 programas enfocados a diferentes grupos objetivos. La tabla 1 muestra la oferta programática que se puede identificar en la página web del MDSF. Se evidencia así una prominencia de programas para el grupo de niñez, familias y personas mayores (tercera edad), puesto que concentran más del 50% de la oferta programática del MDSF.

Tabla 1: Oferta de Programas Sociales según Grupos Objetivos en Chile

Grupos objetivos	Programas sociales	% por grupo objetivo
Niñez 0 a 18 años	20	19.23%
Familias	19	18.27%
Personas Mayores 60 años y más	15	14.42%
Personas con discapacidad	14	13.46%
Personas adultas 19 a 64 años	11	10.58%
Pueblos indígenas	9	8.65%
Jóvenes hasta los 29 años	9	8.65%
Personas en situación de calle	7	6.73%
Total	104	100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos Subsecretaría de Previsión Social (2022).

Tal como se desarrolló en la sección anterior, el sistema de políticas sociales locales está estrechamente relacionado a la política social nacional. En general, los procesos se planifican a nivel central (Navarrete, 2023; Cravacuore, Montecinos y Sanabria-Pulido, 2024) para luego ejecutarse a nivel regional y municipal.

La inexistencia de sistemas estandarizados mediante los cuales las personas e investigadores puedan informarse sobre las políticas sociales llevadas a cabo por los gobiernos locales a nivel particular dificulta en gran medida una investigación profunda sobre el tema. Es más,

Chile no cuenta con una agencia de evaluación de políticas públicas, por lo que tampoco desde el gobierno se cuenta con la oferta programática total de las políticas sociales locales. En general, las políticas se dispersan entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Presupuestos de Chile, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, los Gobiernos Regionales. Aun así, los esfuerzos por centralizar, consolidar y evaluar programas sociales en Chile han ido en aumento. Un ejemplo de esto son los Bancos Integrados, en particular, dos de ellos.

El primero, el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales (BIPS) que pone a disposición de la ciudadanía un listado oficial de los programas sociales junto con una descripción detallada de cada uno. Para los programas sociales actualmente en ejecución por el Estado de Chile, se incluye adicionalmente un informe de seguimiento. En el caso de los programas nuevos o aquellos que han sido significativamente reformulados, se proporciona un informe de recomendación basado en los resultados de la evaluación *ex ante*, esto es, un informe previo a su ejecución. La Ley 20.530, promovida por el Ministerio de Desarrollo Social, estableció como una de sus funciones principales asegurar la coherencia y coordinación de la oferta social del Estado. Por esta razón, la institución debe recopilar, evaluar y analizar anualmente la información de los distintos programas sociales.

El segundo, Banco Integrado de Proyectos de Inversión (BIP), a cargo del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública nacional. Para ello, asigna recursos públicos a iniciativas que generan un mayor bienestar para la sociedad, medido a través de una mayor rentabilidad social y económica. Además, se esfuerza por disminuir los efectos adversos del cambio climático, de acuerdo con estándares técnicos y en conformidad con los lineamientos de las políticas del Gobierno. El sistema de información BIP tiene como objetivo fundamental apoyar la toma de decisiones en la gestión de la inversión pública, abarcando desde la preinversión hasta la operación. Además, registra todas las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento de recursos del Estado, constituyendo una base para proporcionar, de manera permanente y oportuna, información sobre los distintos procesos que conforman la gestión de la inversión pública. En estos procesos participan diversas instituciones públicas, como Ministerios, Servicios Públicos, Gobiernos Regionales, Municipalidades y Empresas Públicas.

III. Metodología

III. a. Métodos

Este estudio emplea un enfoque metodológico cuantitativo, enfocándose en el análisis estadístico descriptivo y bivariado de un conjunto de datos que abarca proyectos de inversión social, además de interpretar cualitativamente resultados en base a la revisión bibliográfica realizada.

Si bien el objetivo principal del artículo es caracterizar la inversión social de los gobiernos subnacionales y no realizar un estudio causal observacional, si se realizaran exploraciones bivariadas, en particular se utilizan correlaciones de Pearson (por su símbolo r), que entregan estimaciones de relación lineal entre variables aleatorias. La formulación de Pearson, en términos generales, proporciona una medida estandarizada de cómo dos variables se relacionan entre sí (a partir de su covariación), ya sea de manera directa o inversa, la fórmula es:

$$r = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \Sigma(y_i - \bar{y})^2}}$$

Donde:

x_i Es el valor i-ésimo de la variable x de interés

y_i Es el valor i-ésimo de la variable y de interés

\bar{x} e \bar{y} son los promedios de ambas variables de interés

Las correlaciones se realizan entre el indicador ajustado poblacional de cantidad de iniciativas, a saber, número de iniciativas cada 100.000 habitantes por municipio, con variables de caracterización comunal, tales como, incidencia de la pobreza, y el porcentaje de población rural.

Cabe aclarar que, si bien existen múltiples variables de interés, las limitaciones en términos de extensión del texto nos impiden profundizar más en ellas. No obstante, esto abre paso a una agenda de investigación más enriquecida en el futuro.

Dado que la cobertura temporal del estudio contiene más de diez años, los valores en precio chileno de los costos totales de las iniciativas en precios corriente pueden ser problemáticos en cuanto a su comparabilidad. Para efectos del análisis se deflactarán en base al año inicial del estudio, a saber, 2009. Para ello, se utilizan los datos de Índice de Precios al Consumidor en base 100, series empalmadas proporcionadas por el Instituto de Estadística de Chile. La fórmula para deflactar utilizada fue:

$$\text{Precio corriente} = \frac{\text{Precio corriente}}{\text{Índice de Precios}} * 100$$

III. b. Muestra

Los datos recolectados para una investigación deben ser producto de una definición operativa del objeto de estudio (Lazarsfeld, 1993), por tanto, a partir de la definición teórica planteada, a saber, las políticas sociales como un conjunto de acciones y programas implementados por el Estado en conjunto a otras instituciones para abordar y mitigar las desigualdades socioeconómicas y mejorar el bienestar de la población, se identificaron dos bases de datos de relevancia, recogidas en organismos del Estado chileno, específicamente, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), este último dependiente del primero.

La primera observación de esta muestra es que es limitada, dado que es exclusivamente observacional y la recolección de datos la realiza un agente externo a los investigadores. En este caso, los responsables ejecutores en una plataforma del Estado. Debido a la inexistencia de un estado del arte robusto sobre cómo capturar las políticas sociales locales en Chile, este estudio adopta este enfoque, dada la naturaleza exploratoria y novedosa de la investigación.

Estas bases de datos son las iniciativas de inversión del Banco Integrado de Proyectos que proporciona datos sobre iniciativas de inversión a nivel local entre 2009 y 2024 (el periodo de extracción fue durante abril de 2024), y el Banco Integrado de Programas Sociales y No

Sociales que disponibilidad el listado oficial de oferta pública sobre programas sociales entre 2012 y 2023, pero con una descripción robusta solo entre 2012 y 2022.

Si bien ambas bases de datos proporcionan información clave sobre los proyectos y programas sociales implementados en los gobiernos subnacionales, el Banco Integrado de Proyectos de Inversión, por sus características, ofrece más información relevante, tal como es el costo total, las instituciones financiadoras y los objetivos de los proyectos, entre otros aspectos. Además, debido a la facilidad para discriminar entre proyectos de ejecución exclusiva de las municipalidades, también proporciona una base más sólida para mejores análisis. Esto no impide que el Banco Integrado de Programas Sociales pueda ser analizado en futuras investigaciones para mejorar la muestra de datos.

Consideramos a las iniciativas de inversión de responsabilidad de municipalidades como buenos caracterizadores de los proyectos sociales, primero, porque las municipalidades son nuestro foco de estudio. Segundo, porque las iniciativas de actividades propias del mejoramiento social del territorio, tales como proyectos educativos en básica y media, de mejoramiento de vialidad peatonal, deporte recreativo, salud de baja complejidad y transporte, son ejemplos directos de intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tercero, el mismo SNI sostiene que los recursos públicos a proyectos de inversión se destinan para un mayor bienestar social y económico. (Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Hacienda, 2024: 9)

Dada la naturaleza amplia de los datos, la tabla 1 caracteriza las bases de datos y proporciona información sobre el N final y la preparación previa.

Tabla 2. Caracterización de los datos

Ítems	Banco Integrado de Proyectos
Periodo de Tiempo Cubierto	2009-2024
Número Total de Entradas Iniciales	51467
Número Final de Entradas Extraídas (N final)	36220
Unidad Final de Análisis	Todas las iniciativas de inversión (IDI) nuevas para cada año, donde las Municipalidades son las instituciones responsables
Entidades Responsables	Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en particular, Sistema Nacional de Inversiones

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2024)

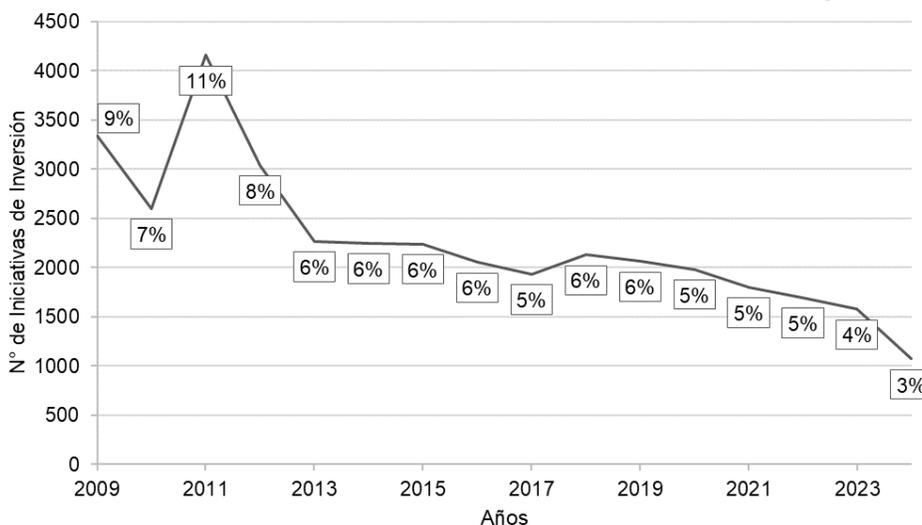
IV. Análisis y resultados

A continuación, se presentan los resultados de la revisión de iniciativas de inversión social. Para una mejor comprensión los resultados se dividen en dos secciones, la primera muestra la descripción y caracterización de los proyectos de inversión donde las Municipalidades son los actores responsables y la segunda parte muestra las relaciones bivariadas.

Las iniciativas de inversión nuevas de responsabilidad de municipios

La figura 3 evidencia el recuento de Iniciativas de Inversión nuevas entre 2009 y 2023. En total se contabilizan 36.220 iniciativas de inversión a cargo de las municipalidades. Se puede evidenciar que hay una tendencia negativa de las iniciativas de inversión, su pico máximo se alcanza entre 2010 y 2012, algo que podría estar relacionado con el terremoto de 2010, que trajo consigo un aumento significativo de proyectos de reconstrucción. Además, es esperable que las iniciativas nuevas sean menores cada año, debido al arrastre a lo largo de los años siguientes.

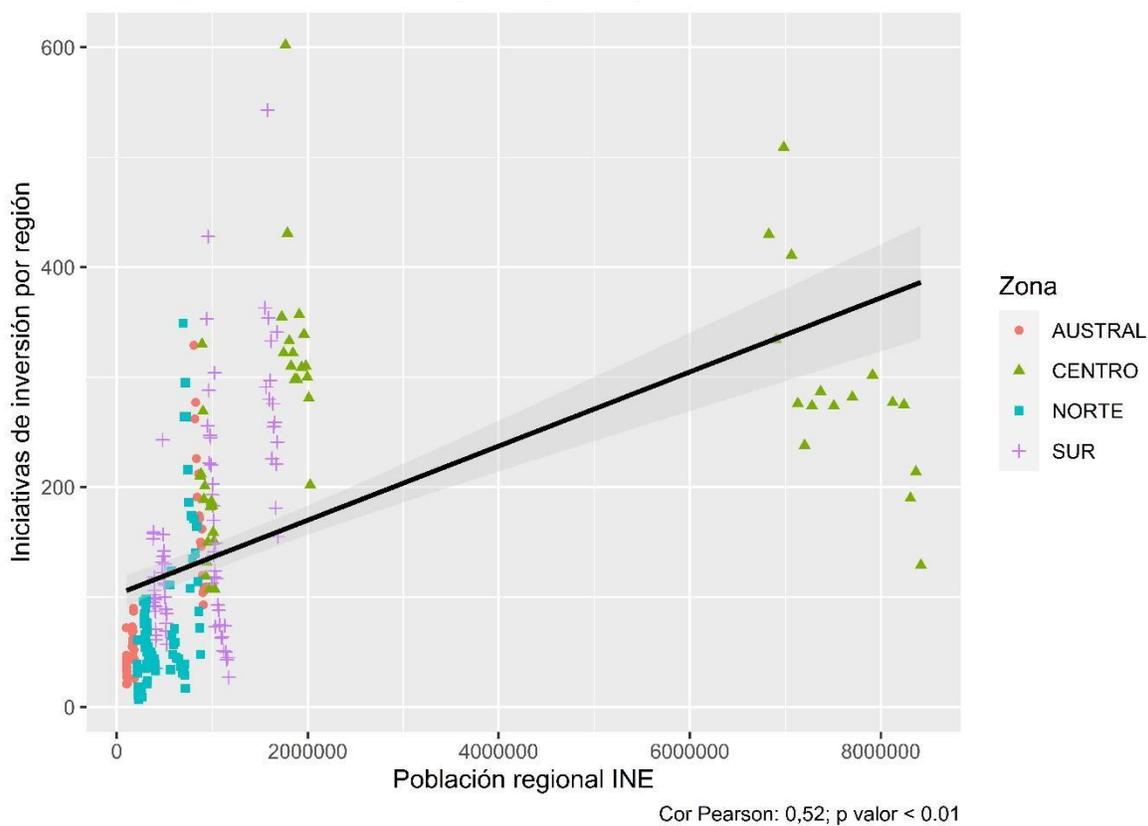
Figura 3. Número de iniciativas de inversión nuevas entre 2009 y abril 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Integrado de Proyectos (2024)

Por otro lado, dada la alta dispersión de la población en el territorio de Chile, con una concentración significativa de población en la zona central (Región Metropolitana y Valparaíso). La figura 4 muestra la correlación entre población e iniciativas de inversión nuevas, esto nos permitirá observar si hay asociación entre la población de una comuna y la cantidad de iniciativas que se presentan, se ordenan a nivel regional y zonal, para poder tener una mejor inspección visual. Así, se observa que, efectivamente, es importante controlar la población para tener una medida ajustada de la comparación de iniciativas a nivel de municipalidades agregadas por región y zona. El gráfico evidencia que las municipalidades de zonas australes tienen menos iniciativas, pero también menor población, frente a las zonas centrales, con más iniciativas y mayor población. Sin embargo, es relevante remarcar dos cosas. Primero, pese a que las municipalidades de la Región Metropolitana concentran entre 7.000.000 y 8.000.000 de habitantes para todos los años, no presentan una cantidad mayor de iniciativas que otras municipalidades de la zona central. Segundo, este método no contempla la dispersión intra-regional, por lo que más adelante se realizarán correlaciones a nivel de comunas.

Figura 4. Total de IDI por regiones y zona entre 2009-abril 2024

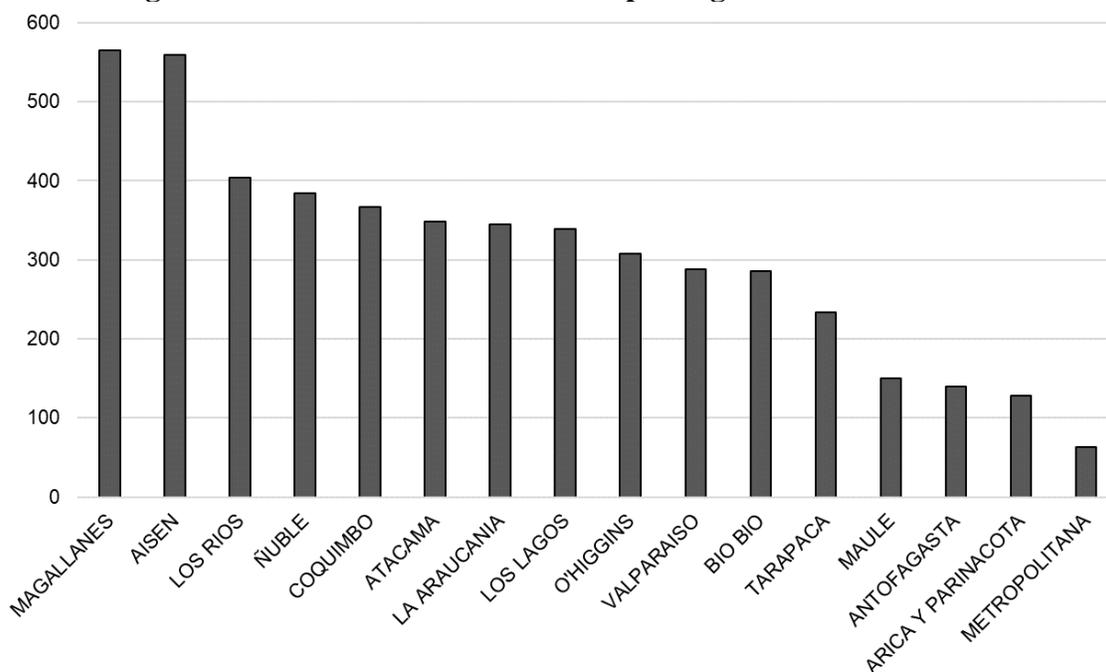


Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

A partir de la comprobación, la figura 5 representa la sumatoria del número de iniciativas de inversión por cada 100.000 habitantes a nivel regional. Se evidencian desigualdades regionales. Las regiones de Magallanes y Aysén muestran los niveles más altos de IDI, superando las 500 iniciativas por cada 100.000 habitantes. Esto implica que tienen una mayor capacidad de gestión y ejecución de proyectos de inversión pública en estas regiones, por lo que podríamos interpretar que sucede debido a políticas focalizadas en mejorar la infraestructura y servicios en zonas extremas del país.

Por otro lado, las Regiones Centrales y Norte tienen menor cantidad de iniciativas por número de habitantes. En particular, las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, y Antofagasta presentan los niveles más bajos de IDI, con menos de 200 iniciativas por cada 100.000 habitantes. Esto podría indicar una menor capacidad de los municipios para acceder y gestionar fondos de inversión pública, o bien una menor priorización de estas regiones en la asignación de recursos fiscales para las inversiones.

Figura 5. Total de IDI cada 100.000h por regiones 2009-abril 2024



Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

De momento hemos identificado que la distribución territorial de las iniciativas nuevas de inversión es dispersa y que, a lo largo de los años, las nuevas iniciativas han disminuido.

El análisis del costo total de las iniciativas requiere un tratamiento estadístico cuidadoso para evitar interpretaciones erróneas. Para ello, se considera la medida del costo promedio de iniciativas comunales, controlando así por el número de iniciativas realizadas. Este ajuste es crucial, dado que, sin él, podríamos incurrir en el error de suponer que una comuna incurre en mayores gastos simplemente debido a un mayor número de iniciativas.

Tabla 3. Costo total de iniciativa para el año presupuestario

Año presupuestario	Suma del Costo Total IDI por comuna (M\$) 2009 = 100	US\$ (dólar a junio 2024 = 915.7)	Total IDI	Promedio IDI (M\$)
2009	1,322,470,382**	1,210,999,353,501	3343	395,594
2010	1,272,075,164	1,164,851,948,426	2599	489,448
2011	2,031,200,435	1,859,990,550,334	4155	488,857
2012	1,668,611,505	1,527,964,241,244	3034	549,971
2013	1,724,345,575	1,579,000,486,483	2257	763,999
2014	1,776,701,095	1,626,942,959,702	2247	790,699
2015	1,837,563,262	1,682,675,054,646	2240	820,341
2016	2,107,829,516	1,930,160,566,096	2053	1,026,707
2017	1,715,094,757	1,570,529,419,932	1934	886,812
2018	1,687,287,057	1,545,065,630,965	2130	792,154

2019	1,806,645,722	1,654,363,554,093	2062	876,162
2020	1,617,184,300	1,480,871,835,353	1981	816,347
2021	1,492,318,519	1,366,530,991,033	1797	830,450
2022	1,285,253,051	1,176,919,071,331	1692	759,606
2023	1,544,760,673	1,414,552,795,873	1576	980,178

**** Cabe destacar que para 2009 se pierden algunos datos debido a un error de origen en la digitación de la comuna de la iniciativa.**

*** Miles de pesos chilenos**

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

La tabla 3 evidencia que, en costos reales con base 2009, la variación de la suma anual del costo total de las iniciativas no ha sido tan fuerte, donde los años 2011 y 2016 presentaron los mayores picos de costo total. Esto refleja en que para 2016, en promedio, las iniciativas postuladas tenían un costo total de mayor a los demás años. Por otro lado, se evidencia un aumento en el costo promedio de las iniciativas, pues, a pesar de que el costo total sumado de los años ha sido relativamente constante, la cantidad de IDI ha ido en disminución, lo que implica un aumento en el tiempo que se visualiza en la columna cinco.

A continuación, se describen los sectores en los que las municipalidades, como actores responsables, generan iniciativas de inversión en sus territorios. La clasificación de los sectores se hizo mediante una codificación manual que integró el sector general de la iniciativa que proporciona el mismo Banco de Proyectos, a saber, salud, transporte, educación y cultura, entre otros, y el nivel más específico, esto es, una subcategoría que el Banco de Proyectos integra en su descripción de las iniciativas. La codificación arrojó 82 posibles combinaciones.

En general, la literatura de las políticas públicas centra su análisis en los sectores de educación, salud y vivienda (Dattwyler, 1999; Salinas, 2002; Donoso, Contreras y Cubillos, 2006), pues consideran que estos ámbitos son significativos para el desarrollo social, más aún, para el caso chileno donde la educación a nivel comunal y la salud primaria son áreas donde los municipios tienen alto impacto en gestión, es esperable encontrar una alta concentración de iniciativas en estas áreas.

La tabla 4 muestra las primeras 20 áreas donde se concentra la mayor cantidad de iniciativas, en total, las primeras 20 concentran más del 80% de la totalidad de iniciativas entre 2009 y abril de 2024. La inspección de la tabla muestra que las áreas de mayor inversión son la viabilidad peatonal, el desarrollo urbano, el deporte recreativo, la educación básica y media (secundaria) y la salud de baja complejidad. Esto es congruente con la teoría, en el sentido de que, efectivamente, las áreas como la salud y la educación juegan un papel relevante en la oferta de inversión pública. Sin embargo, es significativo evidenciar que, si bien estas áreas han ocupado cerca del 25% del total de iniciativas de inversión entre 2009 y 2024 en municipalidades, el transporte y la viabilidad peatonal tiene el mayor peso relativo en categoría única (14%), un vistazo más detallado a los datos evidencia que gran proporción de esta inversión tienen relación con pavimentación y mejoramiento de calles y veredas.

Tabla 4. Distribución de iniciativas en las primeras 20 áreas entre 2009 y abril 2024

Áreas	% del total
Iniciativas de transporte centradas en transporte urbano y vialidad peatonal	14.0
Iniciativas de vivienda y desarrollo urbano centradas en desarrollo urbano	11.7
Iniciativas de deportes centradas en deporte recreativo	8.2
Iniciativas de educacion, cultura y patrimonio centradas en educación básica y media	7.6
Iniciativas de salud centradas en baja complejidad	5.5
Iniciativas de recursos hídricos centradas en agua potable	5.4
Iniciativas de recursos hidricos centradas en evacuacion disposicion final aguas servidas	4.9
Iniciativas de multisectorial centradas en organizacion y servicios comunales	4.7
Iniciativas de energia centradas en distribucion y conexion final usuarios	3.7
Iniciativas de educacion, cultura y patrimonio centradas en arte y cultura	3.6
Iniciativas de multisectorial centradas en administracion multisector	3.3
Iniciativas de seguridad publica centradas en seguridad publica	2.9
Iniciativas de energía centradas en alumbrado publico	2.3
Iniciativas de vivienda y desarrollo urbano centradas en solucion habitacional parcial o complementaria	1.7
Iniciativas de recursos naturales y medio ambiente centradas en medio ambiente	1.7
Iniciativas de multisectorial centradas en intersubsectorial multisector	1.4
Iniciativas de deportes centradas en intersubsectorial deportes	1.4
Iniciativas de deportes centradas en deporte formativo	1.4
Iniciativas de educacion, cultura y patrimonio centradas en educación prebásica	1.3

Iniciativas de deportes centradas en deporte competitivo	1.3
----------------------------------------------------------	-----

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

Relación entre inversión social y la pobreza comunal y ruralidad

La Tabla 5 presenta las correlaciones de Pearson entre la cantidad de iniciativas de inversión por cada 100.000 habitantes y la incidencia de la pobreza comunal, agrupadas por años. Desde una perspectiva teórica, se pueden plantear dos hipótesis principales contrapuestas. La primera sostiene que, los municipios con alta incidencia en la pobreza correlacionan con municipios de bajos ingresos, así los municipios tendrían menos capacidad para llevar a cabo iniciativas de inversión, por falta de recursos y liderazgo (Díaz y Aguirre, 2011; Ramutsheli y Janse van Rensburg, 2015), por tanto, no coocurriría una situación tal donde existen altos niveles de pobreza y muchas iniciativas de inversión. En contraposición, la segunda hipótesis sugiere que niveles más bajos de pobreza podrían estar positivamente correlacionados con una mayor cantidad de iniciativas de inversión, ya que se requerirían más esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes en contextos de pobreza elevada (Fan, Jitsuchon y Methakunnavut, 2004), cabe destacar que no buscamos una explicación causal, debido a la inexistencia de control de variables de confusión, sino estimar una medida de asociación entre ambos conjuntos de datos.

Tabla 5. Relación entre iniciativas de inversión cada 100.000 habitantes y pobreza comunal

Año	Correlación estimada	Estadístico	P valor	Intervalo - bajo	Intervalo - alto
2009	-0.02555	-0.46633	0.641287	-0.13234	0.081832
2010	-0.195	-3.68208	0.000269*	-0.29452	-0.09129
2011	-0.0466	-0.86401	0.388186	-0.15144	0.059278
2012	-0.02832	-0.52464	0.600172	-0.13351	0.077503
2013	0.029089	0.538964	0.590261	-0.07673	0.134264
2014	-0.00414	-0.07667	0.938931	-0.10968	0.101492
2015	0.092981	1.729517	0.084616	-0.01273	0.196638
2016	0.11161	2.080042	0.038264*	0.006094	0.214668
2017	0.137506	2.571075	0.010559*	0.032389	0.239615
2018	0.037185	0.689145	0.491198	-0.06867	0.142214
2019	0.048038	0.890713	0.373708	-0.05784	0.152851
2020	0.053866	0.999055	0.318472	-0.05202	0.158552
2021	-0.10252	-1.90869	0.057136	-0.20588	0.003104
2022	-0.0475	-0.88079	0.379048	-0.15233	0.058376
2023	0.055954	1.03791	0.300043	-0.04993	0.160593

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

En general, la tabla sugiere que en la mayoría de los años no se encuentra una relación estadísticamente significativa entre las iniciativas de inversión y la pobreza comunal. Sin embargo, en 2010, 2016 y 2017, sí hay una correlación significativa, indicando que, en estos

años específicos, los cambios en la inversión tienen una relación más clara con los niveles de pobreza comunal.

Más en específico, se puede evidenciar en la figura 6 que la línea de tendencia indica que, en general, la correlación ha aumentado ligeramente a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la relación entre las iniciativas de inversión y la pobreza comunal se ha vuelto más positiva o menos negativa con el tiempo. Durante el período 2009-2010, las correlaciones son negativas, destacándose el año 2010 con una correlación notablemente negativa de -0.195 . Entre 2011 y 2015, las correlaciones fluctúan alrededor de cero, con algunos años mostrando correlaciones positivas y otros negativas. En 2016 y 2017, se observa una tendencia hacia correlaciones positivas, alcanzando valores de 0.11161 y 0.137506 respectivamente. En el período de 2018 a 2023, la correlación vuelve a fluctuar, pero mantiene una tendencia ligeramente positiva o cercana a cero, con la excepción de 2021, donde se observa una correlación negativa considerable de -0.10252 .

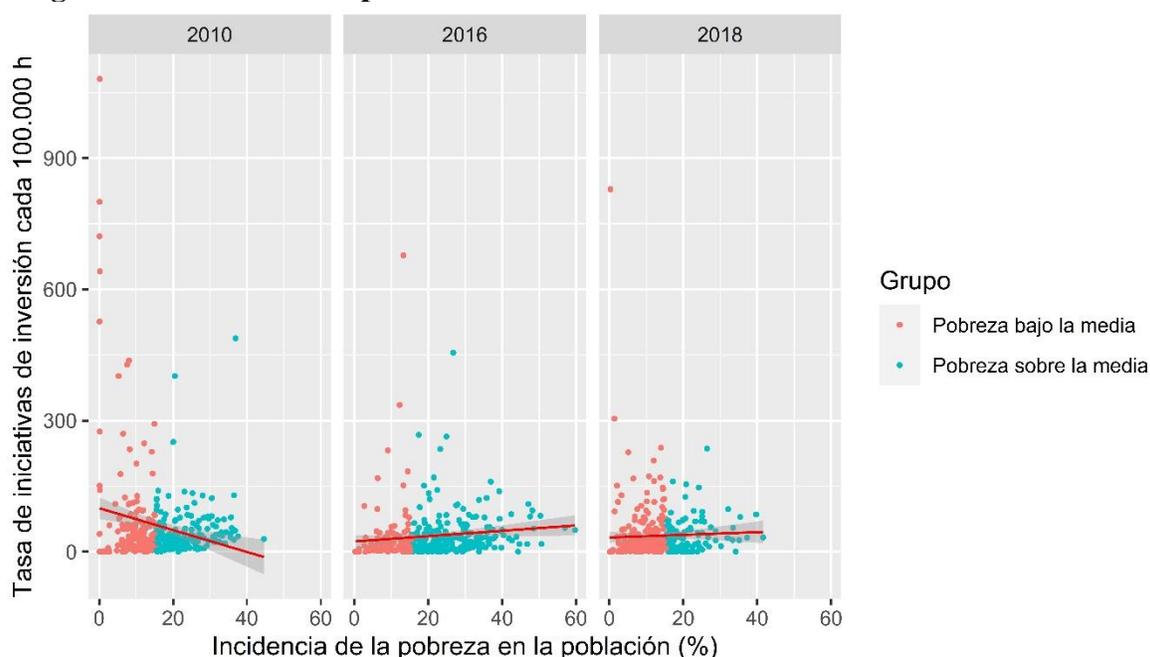
El gráfico muestra picos y valles significativos. El año 2017 presenta la correlación más alta, con un valor de 0.137506 , indicando una relación positiva significativa entre las iniciativas de inversión y la pobreza comunal. Por otro lado, el año 2010 muestra la correlación más negativa de -0.195 , sugiriendo una relación inversa significativa en ese año.

Una correlación positiva, como se observa en años como 2017, sugiere que un aumento en las iniciativas de inversión por cada 100.000 habitantes está asociado con un aumento en la incidencia de la pobreza comunal. Esto puede parecer contraintuitivo y podría indicar que las inversiones no están siendo efectivas para reducir la pobreza o que están dirigidas a áreas con mayores problemas de pobreza. Por otro lado, una correlación negativa, como en 2010, indica que un aumento en las iniciativas de inversión está asociado con una reducción en la incidencia de la pobreza comunal, lo cual sería el resultado esperado si las inversiones están siendo efectivas en combatir la pobreza. Las fluctuaciones anuales en la correlación sugieren que la efectividad de las inversiones en relación a la pobreza comunal puede variar significativamente de un año a otro, posiblemente debido a cambios en políticas, prioridades de inversión, o condiciones económicas externas.

Lo interesante surge cuando observamos que para 2010 existe una relación inversa, es decir, ocurría que comunas con mayor incidencia de la pobreza tenían menos iniciativas de inversión, acá es importante recalcar que en 2010 Chile sufrió un terremoto de gran magnitud, podríamos suponer que en la medida que las zonas pobres sufrieron más los estragos de la catástrofe, existía menos capacidad de gestionar iniciativas de inversión. Esto es relevante de mencionar pues los dos años con significancia estadística son 2016 y 2017, donde la correlación es positiva, esto indica que ocurría que municipios con más niveles de pobreza sostenían más iniciativas de inversión de su responsabilidad.

La figura 7 evidencia visualmente el resultado de las correlaciones, observamos que, durante 2010, un grupo de comunas con niveles de pobreza bajo la media de 15.4% , tenían más proyectos de inversión que los demás, para 2016 y 2018, en especial este último, observamos que el grupo de menor pobreza disminuye su participación dentro de valores atípicos en cantidad de iniciativas de inversión.

Figura 7. Relación entre pobreza e iniciativas de inversión cada 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

Para el caso de la pobreza con el costo total de las iniciativas la tabla 6 muestra que existe una mayor prevalencia de correlaciones inversas tanto significativas como no significativas. Por otro lado, hay más años significativo, a saber, 2015, 2017, 2018, 2020 y 2023, las correlaciones estimadas negativas demuestran que ocurre una situación en la que las comunas con mayor pobreza tienen iniciativas con costos totales menores al final del año presupuestario, esto implica que presentan iniciativas que requieren menos costos, lo cual puede ser lógico por la menor capacidad de gestión que presentan comunas de menores ingresos, y donde los proyectos pueden ser de menor alcance.

Tabla 6. Relación entre el costo total de las iniciativas y la pobreza comunal

Año	Correlación estimada	Estadístico	P valor	Intervalo - bajo	Intervalo - alto
2009	-0.06941	-1.2524	0.2113	-0.176702834	0.039513
2010	0.015896	0.28836	0.7733	-0.092062331	0.123485
2011	-0.04252	-0.77895	0.4366	-0.148680104	0.064608
2012	-0.04102	-0.75025	0.4536	-0.147365062	0.066268
2013	-0.05724	-1.02879	0.3044	-0.165168143	0.052047
2014	-0.05459	-0.98257	0.3266	-0.162417739	0.054526
2015	-0.22438	-4.13175	0.0000*	-0.325387021	-0.11831
2016	-0.04407	-0.79155	0.4292	-0.15229754	0.065205
2017	-0.26638	-4.88157	0.0000*	-0.366264064	-0.16042
2018	-0.18482	-3.32704	0.0010*	-0.289412811	-0.07586
2019	-0.07477	-1.33716	0.1821	-0.182914567	0.035154
2020	-0.17719	-3.22563	0.0014*	-0.280886217	-0.0694

2021	-0.09059	-1.6119	0.1080	-0.198935149	0.019941
2022	-0.06144	-1.0733	0.2840	-0.172377903	0.051033
2023	-0.12822	-2.26523	0.0242*	-0.23641175	-0.01688

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Integrado de Proyectos e Instituto Nacional de Estadística (2024)

Conclusión

El objetivo de este estudio era proporcionar una medición sobre las políticas sociales que se implementan en los gobiernos locales chilenos. Conceptualizamos las políticas sociales como un conjunto de acciones y programas implementados por el Estado en coordinación con otras instituciones, para abordar y mitigar las desigualdades socioeconómicas y mejorar el bienestar de la población. Se identificaron dos bases de datos de relevancia recogidas en organismos del Estado chileno, específicamente, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a saber, el Banco Integrado de Proyectos de Inversión Social (BIP) y el Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales (BIPS), debido a las limitaciones propias de un estudio de esta magnitud, y a las características propias de las bases de datos, decidimos acotar la muestra a los proyectos de inversión social del BIP, sin perjuicio de que en futuras investigaciones incorporar los datos del BIPS se pueda tener una muestra más grande de datos para el análisis.

Los resultados muestran que la oferta de proyectos de inversión social nuevos alcanza más de 36.000 entre 2009 y 2024. Los municipios con mayor población también tienen un mayor número de iniciativas de inversión, por lo que es necesario realizar una corrección de los datos en base a la población total comunal. Además, los sectores con más iniciativas son la vialidad peatonal, el desarrollo urbano, la educación básica y media, el deporte recreativo y la salud de baja complejidad, todos sectores asociados tradicionalmente con la oferta de proyectos sociales en los municipios chilenos, en particular, la salud primaria y la educación básica y media.

Finalmente, aunque en algunos años se observa una relación inversa entre la cantidad de proyectos de inversión y la pobreza comunal, no parece haber una asociación clara entre ambos indicadores, en cuanto a los costos de las iniciativas existe más evidencia que sostiene que comunas pobres suelen postular iniciativas de inversión con costos menores, probablemente, por la menor capacidad de gestión, lo que incentiva proyectos de menor alcance.

Referencias

- Alcock, Pete. 2022. "What is social policy?". *The Student's Companion to Social Policy*, 5-10.
- Aldunce, Paulina, Dámara Araya, Rodolfo Sapiain, Ramos, Issa Ramos, Gloria Lillo, Anahí Urquiza y René Garreaud. 2017. "Local perception of drought impacts in a changing climate: The mega-drought in central Chile". *Sustainability*, 9(11): 2053.
- Aninat, Cristóbal, John Londregan, Patricio Navia y Joaquín Vial. 2011. "Juego político cooperativo. Instituciones, procesos políticos, y características de las políticas públicas en Chile". En Scartascini, C. et al. (comps.). *El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas?:* Colombia: Planeta.
- Béland, Daniel. 2005. "Ideas and social policy: An institutionalist perspective". *Social Policy y Administration*, 39(1), 1-18.
- Boeninger, Edgardo. 1997. *Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad*. Santiago de Chile: Andrés Bello.
- Caporaso, James y Joseph Jupille. 1999. *The Europeanization of gender equality policy and domestic structural change*. ARENA.
- Cook, Linda y Elena Vinogradova. 2006. "NGOs and social policy-making in Russia's regions". *Problems of Post-Communism*, 53(5), 28-41.
- Covarrubias, Francisco, Ignacio Irrarázaval y Los Ángeles Morandé. 2011. "Sistema integrado de información social: Chile". *Integrados de Información Social*, 159.
- Cravacuore, Daniel, Egon Montecinos, y Pablo Sanabria-Pulido. 2024. "Intergovernmental relations and decentralization in Chile: the inertia of centralism and functionalism". En Claudia Avellaneda (Ed.) *Handbook on Subnational Governments and Governance*. Edward Elgar Publishing.
- Daly, Mary. 2003. "Governance and social policy". *Journal of social policy*, 32(1): 113-128.
- Dattwyler, Rodrigo. 1999. "Continuidad y cambio en un siglo de vivienda social en Chile (1892-1998). Reflexiones a partir del caso de la ciudad de Santiago". *Revista de Geografía Norte Grande*, (26): 69-77.
- Deacon, Bob. 2007. *Global social policy and governance*. SAGE
- Delamaza, Gonzalo, Claudia Robles, Egon Montecinos y Carlos Ochsenius. 2012. "Redes de política pública y agendas de participación ciudadana en el Chile posttransicional: ¿Desafiando la política o recreando sus límites?". *Gestión y política pública*, 21(1): 45-86.
- Díaz, Marcelo H. y Javier Fuenzalida. 2011. "Compensando la desigualdad de ingresos locales: El Fondo Común Municipal (FCM) en Chile. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, (4), 73-104.
- Dini, Marco, y Felipe Correa. 2019. Políticas de desarrollo económico local en las municipalidades de Chile: más allá del asistencialismo.

- Dollery, Brian E. y Joel Wallis. 1997. "Market failure, government failure, leadership and public policy". *Journal of Interdisciplinary Economics*, 8(2): 113-126.
- Donoso, Andrés, Rafel Contreras, Leonardo Cubillos y Luis Aravena. 2006. "Interculturalidad y políticas públicas en educación: Reflexiones desde Santiago de Chile". *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 32(1): 21-31.
- Falleti, Tulia, G. y Santiago Cunial. 2018. *Participation in social policy: public health in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Fan, Shenggen, Somchai Jitsuchon y Nuntaporn Methakunnavut. 2004. "The importance of public investment for reducing rural poverty in middle-income countries: The case of Thailand". *AgEconSearch*. 7.
- Ffrench-Davis, Ricardo. 2003. *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. JC Sáez Editor.
- Fløysand, Arnt, Jonathan Barton, y Álvaro Román. 2010. "La doble jerarquía del desarrollo económico y gobierno local en Chile: El caso de la salmonicultura y los municipios chilotes". *EURE (Santiago)*, 36(108): 123-148.
- Greener, Ian. 2002. "Agency, social theory and social policy". *Critical social policy*, 22(4): 688-705.
- Henríquez, Osvaldo. 2020. "Las leyes de descentralización en Chile: eje del cambio de la intergubernamentalidad pasando de la jerarquía a la negociación". *Revista iberoamericana de estudios municipales*, (21): 5-28.
- Hoggett, Paul. 2001. "Agency, rationality and social policy". *Journal of social policy*, 30(1): 37-56.
- Huber, Evelyne y John Stephens. 2012. *Democracy and the left: Social policy and inequality in Latin America*. University of Chicago Press.
- Lazarsfeld, Paul. 1993. *On social research and its language*. University of Chicago Press.
- Lazarus et al. "A multinational Delphi consensus to end the COVID-19 public health threat". *Nature*, 611(7935): 332-345.
- León, Javier A. y Esau Aaron Figüeroa Silva. 2020. "Deliberación democrática y gobernanza en la participación ciudadana local. El caso de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC), Biobío, Chile". *Desafíos*, 32(2): 127-164.
- Llanquileo-Melgarejo, Paula, y María Molinos-Senante. 2021. "Evaluation of economies of scale in eco-efficiency of municipal waste management: an empirical approach for Chile". *Environmental Science and Pollution Research*, 28(22): 28337-28348.
- Mancilla, Max A. 2023. *Gobierno regional y local en el diseño del régimen militar y su transformación desde el retorno a la democracia*. Correa-Sutil, Sofía (dir.), Universidad de Chile, Santiago.
- Mardones, Rodrigo. 2006. Descentralización y transición en Chile. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 26(1): 03-24.

Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Hacienda. 2024. Normas, Instrucciones y Procedimientos (NIP) para el proceso de inversión pública. En sni.gob.cl. Recuperado 1 de junio de 2024, de https://sni.gob.cl/storage/docs/NIP_2024.pdf

Montecinos, Egon. 2005. “Antecedentes sobre la relación histórica centralismo y descentralización en Chile”. *Revista venezolana de Gerencia*, 10(31): 433-462.

Montecinos, Egon. 2005b. “Los estudios de descentralización en América Latina: una revisión sobre el estado actual de la temática”. *Eure (Santiago)*, 31(93): 73-88.

Montecinos, Egon. 2020. “Elección de gobernadores regionales en Chile: escenarios de cambio en las relaciones intergubernamentales”. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 40(3): 567-587.

Montecinos, Egon. 2021. *Centralismo y descentralización en Chile: pasado, presente y propuestas de futuro*. RIL editores.

Morgan, Kimberly J., y Andrea Louise Campbell. 2011. *The delegated welfare state: Medicare, markets, and the governance of social policy*. Oxford University Press.

Mouritzen, Poul y James H. Svara. 2002. *Leadership at the apex: politicians and administrators in Western local governments*. University of Pittsburgh Pre.

Munoz Arce, Giannina y Christina Pantazis. 2019. Social exclusion, neoliberalism and resistance: The role of social workers in implementing social policies in Chile. *Critical Social Policy*, 39(1), 127-146.

Navarrete, Bernardo. 2023. “Intergovernmental Relations in Chile”. *Public Organization Review*, 23(3): 905-925.

Navarrete, Bernardo y Víctor Higuera. 2014. “Chile desde la Teoría secuencial de la descentralización, 1990-2010”. *Convergencia*, 21(66): 179-202.

Olate, María L. 2018. “Política educativa para migrantes en Chile: un silencio elocuente”. *Polis. Revista Latinoamericana*, (49).

Olavarría, Mauricio. 2012. “La evaluación de programas en Chile: análisis de una muestra de programas públicos evaluados”. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (54): 143-178.

Olavarría, Mauricio, y Verónica Figueroa-Huencho. 2010. *Una agencia de evaluación de políticas públicas para Chile: Lecciones de la historia y de la experiencia internacional*. Editorial Universitaria de Chile.

Pinnock, Katherine. 2002. “The Impact of the NGO Sector and Roma/Gypsy Organisations on Bulgarian Social Policy-making 1989–1997”. *Journal of Social Policy*, 31(2): 229-250.

Ramutsheli, Mashamaite P., y Jacobus Oosthuizen Janse van Rensburg. 2015. “The root causes for local government's failure to achieve objectives”. *Southern African Journal of Accountability and Auditing Research*, 17(2): 107-118.

Rein, Martin, y Lee Rainwater. 2019. *Public/private interplay in social protection*. Taylor y Francis.

- Rodríguez, Alfredo y Ana Sugranyes. 2004. "El problema de vivienda de los con techo". *Eure (Santiago)*, 30(91): 53-65.
- Sabatini, Francisco y Isabel Brain. 2008. "La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves". *Eure (Santiago)*, 34(103): 5-26.
- Salinas, Judith. 2002. "Promoción de la salud en Chile". *Revista chilena de nutrición*, 29: 164-173.
- Torjman, Sherri, y Eric Leviten-Reid. 2003. *The social role of local government*. Ottawa: Caledon Institute of Social Policy.
- Torri, María Constanza. 2012. "Multicultural social policy and community participation in health: new opportunities and challenges for indigenous people". *The International Journal of Health Planning and Management*, 27(1): e18-e40.
- Valenzuela, Juan M., Pía Labarrera y Paula Rodríguez. 2008. "Educación en Chile: Entre la continuidad y las rupturas. Principales hitos de las políticas educativas". *Revista iberoamericana de educación*, 48: 129-145.
- Waissbluth, Mario, Cristian Leyton y José Inostroza. 2007. "La descentralización en Chile 1990-2005: asignatura pendiente". *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (37): 1-11.
- Winchester, Lucy J. 2005. "Gestión Social Municipal de Programas de Superación de la Pobreza en Chile: Reflexiones a Partir de la Experiencia con el Programa Puente y Chile Solidario 2005". *Actas X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, Santiago: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.
- Woolf, Steven H. 2009. "Social policy as health policy". *Jama*, 301(11): 1166-1169.